



Asamblea General

Distr. general
27 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos
Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria**

**Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre
la Detención Arbitraria en su 60º período de sesiones
(2 a 6 de mayo de 2011)**

Nº 6/2011 (Jamahiriya Árabe Libia*)

Comunicación dirigida al Gobierno el 19 de enero de 2011

Relativa a: Imed Al Chibani

El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido por la antigua Comisión de Derechos Humanos mediante su resolución 1991/42. El mandato del Grupo de Trabajo fue aclarado y prorrogado por la Comisión en su resolución 1997/50. El Consejo de Derechos Humanos asumió el mandato en su decisión 2006/102 y lo prorrogó por tres años mediante su resolución 15/18, de 30 de septiembre de 2010.
2. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya proporcionado la información solicitada.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en detención de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

* La antigua Jamahiriya Árabe Libia pasó a llamarse Libia a partir del 16 de septiembre de 2011.

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pertinentes instrumentos internacionales aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de la libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento, el origen nacional, étnico o social, el idioma, la religión, la condición económica, la opinión política o de otra índole, el género, la orientación sexual, la discapacidad u otra condición, y tiene por objeto hacer caso omiso de la igualdad de derechos humanos o puede causar ese resultado (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. La fuente informó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de que el Sr. Al Chibani, nacido en 1978 en Benghazi, reside normalmente en Ard Azwaw, Benghazi.

5. De acuerdo con la información recibida, la mañana del 10 de julio de 2007, el Sr. Al Chibani fue detenido cerca de su residencia por agentes de Al Amn Addajhili, los servicios de seguridad interna, que iban vestidos de civil. Según parece, el Sr. Al Chibani fue trasladado a las oficinas de las fuerzas de seguridad interna situadas cerca de la clínica An nahr Assinyi, en Benghazi, donde se le mantuvo en régimen de aislamiento.

6. Según la fuente, los detenidos puestos en libertad el 15 de julio de 2007 en ese centro declararon que al parecer el Sr. Al Chibani había sido objeto de torturas desde el momento de su detención. La fuente informa de que el Sr. Al Chibani ya había sido víctima presuntamente de desaparición forzada; había sido detenido por las fuerzas de seguridad interna el 5 de diciembre de 2005, torturado y mantenido en régimen de aislamiento durante diez meses, y luego puesto en libertad el 14 de octubre de 2006. El Sr. Al Chibani nunca compareció ante un juez ni ante ninguna otra autoridad competente.

7. Los familiares del Sr. Al Chibani desconocen los motivos de su detención y actual privación de libertad, pero sospechan que puede obedecer al hecho de que tras su puesta en libertad el 14 de octubre de 2006, el Sr. Al Chibani, presuntamente, había recibido amenazas por utilizar Internet. La madre del Sr. Al Chibani ha tomado varias medidas para obtener información acerca de su suerte y paradero. No fue sino hasta mayo de 2008 que los servicios de seguridad interna admitieron que mantenían privado de libertad al Sr. Al Chibani en la cárcel de Assaka, donde sus familiares pudieron visitarlo.

8. El 28 de mayo de 2008 la familia del Sr. Al Chibani pudo visitarlo por primera vez y observó que sus condiciones de salud se habían deteriorado gravemente. Según la información recibida, se informó a la familia que el Sr. Al Chibani había sido objeto de supuestos actos de tortura tras su detención y que no había sido inculcado formalmente ni se habían iniciado acciones judiciales en su contra.

9. La fuente afirma que ambos períodos de privación de libertad, es decir, del 5 de diciembre de 2005 al 14 de octubre de 2006, y el actual, desde el 10 de julio de 2007, no tienen fundamento jurídico alguno y no están en consonancia con el derecho interno de Libia ni con el derecho internacional. En ese contexto, la fuente se remite al cuarto informe

periódico del Estado parte al Comité de Derechos Humanos, de fecha 10 de mayo de 2007 (CCPR/C/LBY/4), en el que se señala que "la Jamahiriya Árabe Libia es un Estado de derecho en el que no pueden imponerse penas al margen de la ley, es decir, fuera de la jurisdicción de los tribunales" (párr. 6). En el párrafo 12 a) del mismo documento, el Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reafirma que "Según la Gran Carta Verde de los derechos humanos en la era de las masas, los hijos de la sociedad jamahiri veneran y protegen la libertad humana y prohíben su restricción". Se hace también referencia al artículo 14 de la Ley de promoción de la libertad, N° 20, de 1991, según la cual "Nadie puede ser privado de su libertad, registrado o interrogado si no se le ha acusado de haber cometido un acto punible por ley, con arreglo a una orden dictada por un tribunal competente, y de conformidad con las condiciones y plazos estipulados por la ley; [...] Los acusados deben permanecer detenidos en un lugar conocido, que se comunicará a sus familiares, por el menor tiempo posible necesario para realizar la investigación y obtener pruebas".

10. La fuente afirma que el Sr. Al Chibani no se benefició de esas garantías jurídicas. Más bien, se le mantuvo en régimen de aislamiento sin que se presentaran cargos en su contra ni se le sometiera a juicio. Según se informa, la familia del Sr. Al Chibani no fue informada de su lugar de detención en el primer período de privación de libertad del 5 de diciembre de 2005 al 14 de octubre de 2006, y solo se enteró el 28 de mayo de 2008 del lugar de su detención desde el 10 de julio de 2007. Según la información recibida, hasta la fecha el Sr. Al Chibani no ha comparecido ante un juez y no se ha beneficiado de asistencia jurídica ni de un juicio imparcial.

Respuesta del Gobierno

11. El Grupo de Trabajo lamenta que no se haya recibido respuesta alguna del Gobierno. El Gobierno no solicitó una prórroga del plazo para responder de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 15 y 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo. El Grupo de Trabajo está en condiciones de emitir una opinión sobre el caso a la luz de las alegaciones formuladas, pese a que el Gobierno no ha proporcionado su versión de los hechos ni una explicación de las circunstancias del caso.

Deliberaciones

12. El Gobierno no proporcionó información alguna para refutar los hechos siguientes: a) el Sr. Al Chibani fue detenido por agentes de policía vestidos de civil el 10 de julio de 2007 y se le mantuvo en régimen de aislamiento; hasta el mes de mayo de 2008 sus familiares desconocían su suerte y su paradero; b) anteriormente había sido detenido el 5 de diciembre de 2005 y privado de libertad hasta el 14 de octubre de 2006, torturado y mantenido en régimen de aislamiento durante más de diez meses; c) tras su puesta en libertad en 2006, el Sr. Al Chibani recibió amenazas por su utilización de Internet; y d) nunca compareció ante una autoridad judicial u otra autoridad competente.

13. Con respecto a su segunda privación de libertad, desde el 10 de julio de 2007, pese a las búsquedas continuas realizadas por su madre y otros familiares, la suerte y el paradero del Sr. Al Chibani seguían siendo desconocidos para la familia hasta 11 meses después de su detención. Los familiares se enteraron de que su situación sanitaria era crítica y que había sido sometido a actos de tortura.

14. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno de Libia que el artículo 9, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella". Tanto el Comité de Derechos Humanos como la antigua Comisión de Derechos Humanos han aclarado que el aspecto fundamental de ese derecho consiste en la posibilidad de impugnar la legalidad de la detención. En la

resolución 1992/35, aprobada por la antigua Comisión de Derechos Humanos el 28 de febrero de 1992, se pedía a todos los Estados que aún no lo hubieran hecho que adoptaran un procedimiento como el de *habeas corpus*, con arreglo al cual toda persona privada de libertad por detención o encarcelamiento tuviera derecho a promover una acción ante un tribunal, con el fin de que el tribunal determinara sin demora si su detención era o no ilegal y, en este último caso, ordenara su inmediata puesta en libertad.

15. El Sr. Al Chibani ha sido privado efectivamente de su derecho a impugnar la legalidad de su detención y privación de libertad. No ha comparecido ante un juez ni se le ha informado de los cargos que se le imputan, tampoco se le han comunicado las razones por las cuales se le mantiene privado de libertad. El Sr. Al Chibani no ha tenido acceso a un abogado ni a asistencia jurídica, y se le ha mantenido en régimen de aislamiento durante períodos prolongados.

16. A la luz de la información recibida y en vista de que el Gobierno no ha esgrimido razón alguna que permita dudar de las alegaciones mencionadas, el Grupo de Trabajo opina que la Jamahiriya Árabe Libia ha violado los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como los artículos 2, 3, 7, 9, 10, 12 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Al Chibani es arbitraria según lo dispuesto en las categorías I y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

17. Además, considerando que el motivo más evidente de la privación de libertad y los abusos de que ha sido objeto el Sr. Al Chibani es el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión mediante la utilización de Internet, el Grupo de Trabajo considera que la privación de su libertad es arbitraria según la categoría II aplicable al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

18. Las consideraciones anteriores se aplican también a la privación de libertad del Sr. Al Chibani durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2005 y el 14 de octubre de 2006.

Decisión

19. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Al Chibani durante el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2005 y el 14 de octubre de 2006 y desde el 10 de julio de 2007 es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 3, 7, 9, 10, 12 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II y III aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

20. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo solicita al Gobierno de la Jamahiriya Árabe Libia que ponga en libertad de inmediato al Sr. Al Chibani y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le conceda una reparación adecuada.

[Aprobada el 3 de mayo de 2011.]